



Academia de la Magistratura

RESOLUCIÓN N° 125-2022-AMAG-DG

Lima, 08 de setiembre de 2022

VISTOS:

El Informe N° 390-2022-AMAG/OAJ, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; el Informe N° 876-2022- AMAG/SA-RRHH, emitido por la Subdirección de Recursos Humanos; el Memorando N° 3613-2022- AMAG/DG, emitido por la Dirección General; y la Solicitud con Hoja de Ruta N° 202202422 vía Sistema de Trámite Documentario, presentado por el señor Frank Martín Tadeo Castro Bárcenas;

CONSIDERANDO:

Que, mediante escrito de fecha 31 de agosto de 2022, el administrado Frank Martín Tadeo Castro Bárcenas se dirige a la Directora General de la Academia de la Magistratura, a fin de solicitar se le brinde la asesoría y defensa legal en denuncia penal seguida en su contra, que versa sobre la presunta comisión del delito contra la Administración Pública en la modalidad de Peculado en agravio del Estado, seguida en la CARPETA FISCAL N° 506015505-2021-365-0 e instaurado en la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios – Primer Despacho.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso I) del artículo 35 de la Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil, en adelante la Ley, el servidor civil tiene los siguientes derechos “Contar con la defensa y asesoría legal, asesoría contable, económica o afín, con cargo a los recursos de la entidad para su defensa en procesos judiciales, administrativos, constitucionales, arbitrales, investigaciones congresales y policiales, ya sea por omisiones, actos o decisiones adoptadas o ejecutadas en el ejercicio de sus funciones, inclusive como consecuencia de encargos, aun cuando al momento de iniciarse el proceso hubiese concluido la vinculación con la entidad. Si al finalizar el proceso se demostrara responsabilidad, el beneficiario debe reembolsar el costo del asesoramiento y de la defensa especializados”;

Que, la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley, indica lo siguiente: “Las entidades públicas deben otorgar la defensa y asesorías, a que se refiere el literal I) del artículo 35 de la presente Ley, a los servidores civiles que ejerzan o hayan ejercido funciones y resuelto actos administrativos o actos de administración interna bajo criterios de gestión en su oportunidad”;

Que, el Artículo 154° del Reglamento de la Ley, aprobado con Decreto Supremo N 040-2014-PCM, en adelante el Reglamento, señala sobre la defensa legal: “Los servidores civiles tienen derecho a contar con la defensa y asesoría legal, asesoría contable, económica o afín, con cargo a los recursos de la entidad para su defensa en procesos judiciales, administrativos, constitucionales, arbitrales, investigaciones congresales y policiales, ya sea por omisiones, actos o decisiones adoptadas o ejecutadas en el ejercicio de sus funciones, inclusive como consecuencia de encargos, aun cuando al momento de iniciarse el proceso hubiese concluido la vinculación con la entidad. La defensa y asesoría se otorga a pedido de parte, previa evaluación de la solicitud. Si al finalizar el proceso se demostrara responsabilidad, el beneficiario debe reembolsar el costo del asesoramiento y de la defensa”;

Que, la Directiva N° 004-2015-SERVIR/GPGSC “Reglas para acceder al beneficio de Defensa y Asesoría de los Servidores y ex servidores civiles”, aprobada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 284-2015-SERVIR-PE, en adelante la Directiva, ha dispuesto en su

artículo 1º: “La presente Directiva tiene por objeto regular las disposiciones para la solicitar y acceder al beneficio de la defensa y asesoría legal, asesoría contable, económica o afín de los servidores y ex servidores civiles de las entidades de la administración pública, con cargo a los recursos de la entidad, en procesos que se inicien por omisiones, actos o decisiones adoptadas o ejecutadas en el ejercicio regular de sus funciones o en el ejercicio regular de encargos, de conformidad con lo estipulado en el literal l) del artículo 35 de la Ley N° 30057”. Dicha Directiva es de aplicación por parte de todas las entidades de la administración pública, independientemente de su autonomía y nivel de gobierno al que pertenecen, en concordancia con lo dispuesto en la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30057;

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 103-2017-SERVIR-PE se aprobaron las **Modificaciones a la Directiva N° 004-2015-SERVIR/GPGSC “Reglas para acceder al beneficio de defensa y asesoría de los servidores y ex servidores civiles”**, procediendo a señalar en el numeral 6.1 los requisitos de procedencia del ejercicio del derecho a la defensa y asesoría;

“6.1. Procedencia del ejercicio del derecho a la defensa y asesoría

Para acceder a la defensa y asesoría, se requiere de una solicitud expresa conteniendo los requisitos establecidos en el numeral 6.3 del artículo 6 de la presente Directiva y que haya sido citado o emplazado formalmente en calidad de denunciado, investigado, procesado, imputado, demandado, testigo, tercero civilmente responsable o para la actuación de alguna prueba, dentro de alguno de los procesos, investigaciones o procedimientos previos mencionados en el numeral 5.2 del artículo 5 de la presente Directiva. Excepcionalmente, se puede conceder el beneficio cuando el servidor o ex servidor acredite de manera indubitable que existen fundados elementos que permitan inferir el inminente inicio de un proceso o procedimiento en su contra. La eficacia de este beneficio estará condicionada a que el beneficiario presente al titular de la entidad la notificación de la citación o emplazamiento en el cual se verifique que se encuentre en alguna de las situaciones procesales descritas en el párrafo anterior. Los hechos vinculados al servidor o ex servidor civil en el proceso o investigación deben estar relacionados a una omisión, acción o decisión realizada en el ejercicio regular de sus funciones o actividades o bajo criterios de gestión en su oportunidad, como está definido en los numerales 5.1.1 y 5.1.2 del artículo 5 de la presente Directiva, derivadas del ejercicio de la función pública”.

Que, el numeral 6.3 del artículo 6 de la Directiva citada en el párrafo anterior, señala los requisitos para la admisibilidad de la solicitud de defensa y asesoría legal, entre los que se encuentran:

“6.3. Requisitos para la admisibilidad de la solicitud

Para acceder al derecho de defensa y asesoría, el solicitante debe presentar ante la oficina de trámite documentario o la que haga sus veces de la entidad respectiva, los siguientes documentos:

- **Solicitud dirigida al Titular de la entidad**, con carácter de declaración jurada, conteniendo los datos completos de identificación, domicilio real, precisando su condición de servidor o ex servidor civil, datos del expediente del procedimiento, proceso o investigación respectivo, una narración de los hechos, copia de la notificación o comunicación de la citación o emplazamiento recibida, calidad del emplazamiento y mención expresa de que los hechos imputados están estrictamente vinculados a omisiones, acciones o decisiones en el ejercicio regular de sus funciones o bajo criterios de gestión que en su oportunidad como servidor civil o ex servidor civil adoptó, derivadas del ejercicio de la función pública (ver Anexo 1). En el supuesto del segundo párrafo del numeral 6.1, el solicitante deberá adjuntar los documentos que permitan acreditar que existen fundados elementos que permitan inferir el inminente inicio de un proceso o procedimiento en su contra. La copia de la notificación o comunicación de la citación o emplazamiento recibida será presentada en forma posterior a la concesión del beneficio y constituye una condición indispensable para su eficacia.

- **Compromiso de reembolso** por medio del cual el solicitante se compromete a devolver el costo de asesoramiento y de la defensa, si al finalizar el proceso se demuestra su responsabilidad (ver Anexo 2), de acuerdo a las condiciones que establezca la entidad.
- **Propuesta de servicio de defensa o asesoría** precisando si ésta se solicita por todo el proceso o por alguna etapa. Cuando se proponga un determinado defensor o asesor deberá señalarse las razones de dicha propuesta, así como el monto estimado de los respectivos honorarios profesionales propuestos (ver Anexo 3). En caso contrario, la entidad, de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado, sus normas complementarias, reglamentarias y/o sustitutorias, podrá atender la solicitud con alguno de los servicios profesionales contratados previamente para tales fines, de ser el caso.
- **Compromiso de devolver a la entidad los costos y las costas determinados a su favor**, en caso no resulte responsable en el procedimiento, proceso o investigación y siempre que dicho pago haya sido ordenado por la autoridad competente. Dicha devolución se realiza a la entidad correspondiente, en el plazo de diez (10) días hábiles, contado a partir del momento en que la parte vencida haya efectuado el pago dispuesto por la autoridad competente. (ver Anexo 4).

Los documentos presentados tendrán la calidad de declaración jurada para todos los efectos legales que correspondan, conforme a la presunción de veracidad contenida en el artículo 49 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y por consiguiente sujetos a verificación.”

Que, la modificatoria del numeral 6.4 del artículo 6 de la Directiva ha dispuesto el procedimiento para la tramitación de la solicitud ante la entidad, señalando en su numeral 6.4.2 que **“La Oficina de Asesoría Jurídica emite opinión sobre el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y la procedencia de la solicitud. Asimismo, prepara el proyecto de resolución respectivo y eleva todo el expediente al titular de la entidad para su aprobación”**;

Que, la Oficina de Asesoría Jurídica ha procedido a revisar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedencia de la solicitud presentada por el ex servidor Frank Martín Tadeo Castro Bárcenas, así como de la información contenida en el Informe N° 876-2022-AMAG/SA-RRHH, emitido por la Subdirección de Recursos Humanos que contiene el Informe Escalafonario N° 047-2022-AMAG/SA-RRHH correspondiente al ex servidor;

Que, si bien el ex servidor Frank Martín Tadeo Castro Bárcenas presenta Solicitud de Acceso a la Defensa y Asesoría legal a través del Registro del Sistema de Trámite Documentario N° 202202422, adjuntando Compromiso de reembolso, Propuesta de Servicio de Defensa, así como, el Compromiso de Devolución. Se ha realizado la evaluación respectiva y se han advertido las observaciones siguientes: i) En el Compromiso de Reembolso, no se precisa la materia que versa la investigación, sobre la denuncia penal seguida en su contra; ii) En su Propuesta de Servicio de Defensa y Asesoría Legal, se ha referenciado a una demanda seguida en su contra (Expediente, materia y juzgado); sin embargo, en su solicitud se ha señalado una denuncia penal seguida en su contra; iii) En el Compromiso de Devolución, no se precisa la materia que versa la investigación, sobre la denuncia penal seguida en su contra;

Que, en ese sentido, el solicitante Frank Martín Tadeo Castro Bárcenas no cumple con los presupuestos de admisibilidad, previstos en la modificatoria del numeral 6.3 del artículo 6 de la Directiva; por tanto, resulta de aplicación lo dispuesto en el 6.4.1 de la referida Directiva: **“La omisión o defecto de los requisitos exigidos en el numeral 6.3 del artículo 6 de la presente Directiva, debe ser subsanada por el solicitante dentro del plazo máximo de dos (2) días hábiles desde que le sea requerido (...) En caso el solicitante no subsane los requisitos de admisibilidad, se considera automáticamente como no presentada la solicitud, y los recaudos se ponen a disposición del servidor o ex servidor para que los recabe en la oficina de trámite documentario o la que haga sus veces de la respectiva entidad; sin perjuicio que pueda nuevamente formular su solicitud”**;

Que, en lo que respecta a la obligación de reembolso, la modificatoria del numeral 6.7 del artículo 6 de la Directiva, prevé: “Si al finalizar el proceso, procedimiento o investigación se determinara la responsabilidad a cargo del servidor o ex servidor civil, este debe reembolsar el monto abonado por concepto de honorarios profesionales por la asesoría profesional prestada y la defensa legal, a la culminación del proceso, debiendo ser requerido previamente mediante comunicación escrita, por la Oficina General de Administración o quien haga sus veces. En caso de incumplimiento de reembolso ante dicho requerimiento, la mencionada oficina remitirá copia de los antecedentes al Procurador Público de su entidad o del sector correspondiente para el inicio de las acciones legales que pudieren tener lugar”;

Que, estando a la normativa vigente entorno a la Defensa Legal de funcionarios y servidores públicos se tiene que es un derecho de los servidores y ex servidores contar con la defensa legal proporcionada por la entidad en la que prestaron servicios, siempre que haya sido citado o emplazado formalmente en calidad de denunciado, investigado, procesado, imputado, demandado, testigo, tercero civilmente responsable o para la actuación de alguna prueba, dentro de alguno de los procesos, investigaciones, que los hechos imputados están estrictamente vinculados a omisiones, acciones o decisiones en el ejercicio regular de sus funciones o bajo criterios de gestión que en su oportunidad como servidor civil o ex servidor civil adoptó, derivadas del ejercicio de la función pública. Todo ello previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el numeral 6.3 de las Modificaciones a la Directiva N° 004-2015-SERVIR/GPGSC “Reglas para acceder al beneficio de defensa y asesoría de los servidores y ex servidores civiles”;

Que, estando al Memorando N° 3613-2022-AMAG/DG de la Dirección General, por el cual solicita evaluación legal sobre el pedido del ex servidor, se ha procedido con la evaluación respectiva;

Que, habiéndose efectuado la revisión, evaluación y análisis de la documentación obrante en el expediente administrativo alcanzado, la Oficina de Asesoría Jurídica emite el Informe N° 390.-2022-AMAG/OAJ, de fecha 08 de septiembre de 2022, el cual contiene su opinión sobre los de la materia, de acuerdo a la normatividad vigente;

Que, habiéndose incumplido con los requisitos de admisibilidad exigidos en la modificatoria del numeral 6.3 del artículo 6 de la Directiva, corresponde declarar INADMISIBLE la solicitud de defensa y asesoría legal presentado por el administrado FRANK MARTIN TADEO CASTRO BÁRCENAS, en consecuencia, se deberá emitir el acto administrativo respectivo;

Que, en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de la Academia de la Magistratura - Ley N° 26335, la Directiva N° 004-2015-SERVIR/GPGSC “Reglas para acceder al beneficio de defensa y asesoría de los servidores y ex servidores civiles” y Modificaciones, de conformidad con el mandato legal, en ejercicio de sus atribuciones;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - DECLARAR INADMISIBLE la Solicitud de Acceso al Beneficio de Defensa y Asesoría Legal presentado por el ex servidor **FRANK MARTÍN TADEO CASTRO BÁRCENAS** sobre la denuncia penal seguida en su contra, que versa sobre la presenta comisión del delito contra la Administración Pública en la modalidad de Peculado en agravio del Estado, seguida en la CARPETA FISCAL N° 506015505-2021-365-0 e instaurado en la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios – Primer Despacho.

ARTICULO SEGUNDO. – CONCÉDASE EL PLAZO LEGAL DE DOS DÍAS HÁBILES a fin de que subsane las siguientes observaciones: i) En el Compromiso de Reembolso, precisar la materia que versa la investigación, sobre la denuncia penal seguida en su contra; ii) En su Propuesta de Servicio de Defensa y Asesoría Legal, se ha referenciado a una demanda seguida en su contra (Expediente, materia y juzgado); sin embargo, en su solicitud se ha señalado una denuncia penal seguida en su contra, en consecuencia, respecto a este formato se deberá aclarar sobre que expediente o carpeta fiscal (número, materia y despacho fiscal o juzgado) se está solicitando la defensa legal, la que deberá guardar relación con el requerimiento principal; iii) En el

Compromiso de Devolución, precisar la materia que versa la investigación, sobre la denuncia seguida en su contra.

ARTÍCULO TERCERO. – DISPONER la remisión de los actuados a la Oficina de Asesoría Jurídica de la Academia de la Magistratura, para que proceda de acuerdo a sus atribuciones y realice el seguimiento a las notificaciones respectivas al administrado **FRANK MARTÍN TADEO CASTRO BÁRCENAS**.

ARTÍCULO CUARTO. – DISPONER que la Oficina de Asesoría Jurídica lleve el registro del control pertinente y el seguimiento del presente.

ARTÍCULO QUINTO. - DISPONER la publicación de la presente Resolución en el portal web de la Academia de la Magistratura.

Regístrese, comuníquese, cúmplase y publíquese.

Firmado digitalmente

NATHALIE BETSY INGARUCA RUIZ
DIRECTORA GENERAL
ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA